

	<b>JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI</b>
<b>Cali</b>	<b>Veinte (20) de abril de dos mil veintidós (2022)</b>

**Auto Interlocutorio N° 223.**

<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>EJECUTIVO</b>
<b>RADICACIÓN:</b>	<b>76001-3333-001-2021-00215-00</b>
<b>EJECUTANTE:</b>	<b>FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 1</b>
<b>EJECUTADO:</b>	<b>NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>

**I. ANTECEDENTES.**

Revisada la demanda se encuentra que el FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 1 mediante apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva en contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que previos los trámites de ley se libre mandamiento de pago a su favor de acuerdo en lo ordenado en la sentencia de 28 de febrero de 2014 proferida en primera instancia por este Juzgado y la sentencia del 20 de octubre de 2015 expedida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

Adicionalmente, la parte ejecutante pretende el pago de los intereses de mora generados por la falta de pago oportuno de la obligación y de las costas procesales impuestas a su favor.

**II. CONSIDERACIONES.**

**1. Título ejecutivo fundamentado en una sentencia judicial.**

De acuerdo a lo estipulado por el numeral 6<sup>1</sup> del artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer los procesos *“ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción”*.

Adicionalmente, el artículo 297 del CPACA, estipula que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad al pago de sumas dinerarias.

<sup>1</sup> 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

Igualmente prevé el numeral 2 del artículo 114 del CGP que *“las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria”*.

En el presente caso, el proceso ejecutivo resulta procedente para obtener el cumplimiento de la obligación existente a favor del accionante, toda vez que el título de ejecución se ajusta a los parámetros normativos expuestos y corresponde a la sentencia de 28 de febrero de 2014<sup>2</sup> proferida en primera instancia por este Juzgado y la sentencia del 20 de octubre de 2015<sup>3</sup> expedida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00 las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas.

## **2. Exigibilidad de las sentencias de condena contra entidades públicas y caducidad de la acción.**

El artículo 192<sup>4</sup> del CPACA, establece que las condenas impuestas a entidades públicas que impliquen el pago o devolución de una suma de dinero deben cumplirse en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

En el caso bajo estudio, la sentencia de segunda instancia que integra el título ejecutivo quedó ejecutoriada el 12 de noviembre de 2015<sup>5</sup>. En consecuencia, se advierte que la obligación determinada a favor de la parte ejecutante es actualmente exigible toda vez que el término concedido en la ley procesal a la entidad pública accionada para dar cumplimiento a la condena se encuentra cumplido.

De otro lado, literal k) del numeral segundo del artículo 164<sup>6</sup> del CPACA consagra que la ejecución de las obligaciones contenidas en una providencia judicial debe solicitarse dentro los de cinco (5) años siguientes a la exigibilidad de la obligación.

En el presente caso, la condena se hizo exigible luego del vencimiento del término de diez (10) meses otorgados por artículo 192 del CPACA a la Fiscalía General de la Nación para su cumplimiento.

---

<sup>2</sup> Folios 1 al 25 del archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>3</sup> Folios 26 al 43 del archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>4</sup> Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

<sup>5</sup> Según constancia secretarial obrante a folio 44 del archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>6</sup> (...) k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida (...)

Teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 12 de noviembre de 2015, la condena se hizo exigible a partir del 13 de septiembre de 2016.

En consecuencia, la oportunidad para solicitar la ejecución de la obligación vencía en principio 13 de septiembre de 2021. Sin embargo, en razón a la suspensión de términos judiciales consagrada en el artículo 1<sup>7</sup> del Decreto 564 de 2020, el periodo se suspendió el 16 de marzo de 2020 fecha en el que habían transcurrido 3 años, 6 meses, y 3 días del plazo de caducidad.

De esta forma, el término de caducidad restante correspondiente a 1 año, 5 meses y 27 días se reanudó a partir del 2 de julio de 2021<sup>8</sup> momento a partir del cual se levantó la suspensión de términos judiciales y venció el 28 de enero de 2022.

Bajo estos parámetros, la demanda ejecutiva se presentó dentro del término legal el 12 de septiembre de 2021 a través de la remisión efectuada al Correo electrónico del Despacho tal como obra en el archivo N° 01 del expediente digital.

### **3. Competencia.**

Conforme lo establece el numeral 9 del artículo 156 del CPACA, la competencia para conocer de la ejecución de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, radica en el Juez que profirió la providencia en primera instancia dando prevalencia al factor de conexidad.

En el presente caso, este Juzgado es competente para dar trámite a la ejecución toda vez que profirió la sentencia de primera instancia en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

### **4. Procedimiento.**

De acuerdo a la remisión expresa que consagra el artículo 306<sup>9</sup> del CPACA y a los parámetros establecidos por el precedente del Consejo de Estado<sup>10</sup>, en los

---

<sup>7</sup> ARTÍCULO 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura

<sup>8</sup> ACUERDO PCSJA20-11567 Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo

<sup>9</sup> Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

<sup>10</sup> En providencia de 27 de abril de 2020, proferida dentro del radicado Radicación número: 05001-23-33-000-2019-00707-01(65427) la Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó la aplicabilidad del CGP a los procesos ejecutivos tramitados ante esta jurisdicción en los siguientes términos:

*“Por virtud de la integración normativa y supletiva que contempla el artículo 299 y la remisión expresa que consagra el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, las reglas aplicables a los asuntos ejecutivos que se tramitan en esta jurisdicción son las contempladas en Código General del Proceso, salvo que exista norma expresa en*

aspectos no regulados, los procesos ejecutivos que se presenten ante esta jurisdicción se deben tramitar conforme a las reglas establecidas por el Código General del Proceso.

## **5. Caso concreto.**

### **5.1. Legitimación en la causa por activa y cesión de derechos.**

La presente demanda ejecutiva es promovida por el FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 1 en calidad de cesionaria del 35% de la totalidad de los derechos económicos reconocidos a favor de los señores CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO, JOSÉ FABIO GÓMEZ GIRALDO, ANA RITA GIRALDO DE GÓMEZ, GUILLERMO ENRIQUE GÓMEZ GIRALDO, BEATRIZ ELENA GÓMEZ GIRALDO, CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO, DIANA PATRICIA GÓMEZ GIRALDO y LEÓN RAMIRO GÓMEZ GIRALDO , dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el N° 76001-33-31-001-2012-00213-00, motivo por el cual se hacen las siguientes precisiones, con el fin de establecer su legitimación para actuar dentro del presente asunto.

En este contexto, con la finalidad de establecer la legitimación en la causa por activa se procederá determinar la serie de contratos de cesión celebrados inicialmente por las personas beneficiarias de la condena, hasta el último negocio jurídico que adjudicó el 35% de la totalidad de la condena a la de la entidad ejecutante.

Con este propósito se tendrá en cuenta la información registrada en el pronunciamiento efectuado el 14 de octubre de 2016 por la Dirección Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se aceptó la cesión correspondiente al 100% de los derechos económicos derivados de la referida sentencia al señor CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO y aceptar la posterior cesión del 35% al señor JOHON EDUARDO CAICEDO HERNÁNDEZ y los contratos de cesión adjuntados con la demanda ejecutiva.

**En primer término**, se celebró un contrato de cesión de la *“totalidad de los derechos, privilegios y acciones inherentes a la naturaleza, condiciones y derechos económicos”* reconocidos a favor de los señores JOSÉ FABIO GÓMEZ GIRALDO, ANA RITA GIRALDO DE GÓMEZ, GUILLERMO ENRIQUE GÓMEZ GIRALDO, BEATRIZ ELENA GÓMEZ GIRALDO, CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO, DIANA PATRICIA GÓMEZ GIRALDO y LEÓN RAMIRO GÓMEZ GIRALDO.

En el contrato, las personas referenciadas cedieron al señor CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO (quien ostenta la calidad de víctima directa del daño) la totalidad de derechos reconocidos a su favor en calidad de accionantes en la sentencia de 28 de febrero de 2014 proferida en primera instancia por este Juzgado y la sentencia del 20 de octubre de 2015 expedida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

**En segundo lugar**, se celebró contrato mediante el cual el señor CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO cedió al señor JOHON EDUARDO CAICEDO

---

*la Ley 1347 de 2011 que reglamente la situación procesal que se presenta en el caso particular, como ocurre frente a las medidas cautelares o frente a los presupuestos de jurisdicción y competencia (artículo 299 de la Ley 1437 de 2011)”.*

HERNÁNDEZ el 35% de la totalidad de derechos reconocidos dentro proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

La cesión efectuada por el señor CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO se fundamentó en el contrato celebrado con el resto de integrantes de la parte accionante el 2 de agosto de 2016 mediante el cual adquirió la totalidad de los derechos reconocidos en las sentencias proferidas en el trámite del proceso 2012-00213.

En este contexto, el 16 de agosto de 2016<sup>11</sup> los señores CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO y JOHON EDUARDO CAICEDO HERNÁNDEZ radicaron ante la Fiscalía General de la Nación una petición con el propósito de que se reconociera al señor CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO como cesionario del resto de integrantes de la parte accionante conforme a lo estipulado en el contrato de 2 de agosto de 2016 y posteriormente que se reconociera al señor JOHON EDUARDO CAICEDO HERNÁNDEZ como cesionario del 35% de la totalidad de los derechos reconocidos dentro proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00 conforme al contrato celebrado el 8 de agosto de 2016.

Esta documentación fue estudiada por el Dirección jurídica de la entidad ejecutada la cual mediante oficio de 14 de octubre de 2016<sup>12</sup>, dispuso aceptar la cesión del crédito, correspondiente al 100% de los derechos económicos derivados de la referida sentencia al señor CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO y aceptar la posterior cesión del 35% al señor JOHON EDUARDO CAICEDO HERNÁNDEZ.

**En tercer lugar**, se adjuntó copia del contrato autenticado ante la Notaría 17 del Círculo de Cali el 27 de mayo de 2020<sup>13</sup> mediante el cual el señor JOHON EDUARDO CAICEDO cedió a la sociedad CONACTIVOS SAS el 35% de la totalidad de derechos reconocidos dentro proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

**En cuarto lugar**, se aportó copia del contrato autenticado ante la Notaría 44 del Círculo de Bogotá el 4 de diciembre de 2020<sup>14</sup> mediante el cual CONACTIVOS SAS cedió al FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEA – COMPARTIMENTO 1 el 35% de la totalidad de derechos reconocidos dentro proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

El 10 de diciembre de 2020<sup>15</sup> CONACTIVOS SAS y el FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEA – COMPARTIMENTO 1 radicaron ante la Fiscalía General de la Nación una petición con el propósito de que se reconociera al FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEA – COMPARTIMENTO 1 como cesionario del 35% de la totalidad de los derechos reconocidos dentro proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00 conforme al contrato celebrado el 3 de diciembre de 2016.

Mediante pronunciamiento de 15<sup>16</sup> de enero de 2021 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación certificó la serie de cesiones

---

<sup>11</sup> Folios 51 al 54 del archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>12</sup> Folios 58 y 59 del archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>13</sup> Folios 68 al 81 del archivo N° 04 del expediente digital

<sup>14</sup> Folios 92 al 100 del archivo N° 04 del expediente digital

<sup>15</sup> Folios 102 al 108 del archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>16</sup> Folios 120 al 123 del archivo N° 04 del expediente digital.

anteriormente referenciada y a través de oficio de 8<sup>17</sup> de marzo de 2021 aceptó “*sin condición alguna*” la última cesión realizada y reconoció al FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 1 como titular del 35% de la totalidad de los derechos reconocidos dentro proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

De acuerdo con lo anterior, es del caso precisar que el artículo 1960 del Código Civil establece que la cesión del crédito no produce efectos contra el deudor ni contra terceros, mientras esta no le haya sido notificada por el cesionario o aceptada por aquel.

Al respecto, el Consejo de Estado mediante providencia de 7 de mayo de 2021<sup>18</sup>, con relación a la figura jurídica de la cesión del crédito, expuso lo siguiente:

(...) La jurisprudencia del Consejo de Estado<sup>19</sup> y de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la cesión del crédito produce efectos jurídicos respecto del deudor si este la conoce o la acepta, puesto que su voluntad no desempeña papel alguno en el contrato que originó la cesión. Ello, en razón a que lo trascendente es informar la ocurrencia del cambio de acreedor y no la obtención de una aprobación o visto bueno de parte del deudor.

En efecto, esta Corporación ha señalado que:

(...) Para que la cesión produzca efectos respecto de éste [deudor] y de terceros, requiere, según el artículo 1960 ibídem, que el deudor la conozca o la acepte, pero nada más. Su voluntad no desempeña papel alguno en el contrato que originó la cesión, el cual se ajusta únicamente entre cedente y cesionario; para él dicho contrato es res inter alios, pues tanto le da satisfacer la prestación o las prestaciones a su cargo a su antiguo deudor o al cesionario, con el fin entendido de que cuando la cesión se le haya notificado o la haya aceptado, el pago válido sólo [sic] podrá hacerlo a este último (...) <sup>20</sup>

Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia<sup>21</sup>, señaló:

(...) La cesión de créditos, de que tratan los artículos 1959 al 1966 del Código Civil, es un negocio jurídico en el que un acreedor transfiere (a cualquier título) a otro, que pasa a sucederlo, los derechos sobre una deuda cuya satisfacción está a cargo de un tercero ajeno a esa transacción, pero que asume las consecuencias luego de ser sabedor de ello, no antes.

Comprende así dos etapas, la primera relacionada con la entrega del título representativo de la obligación del tenedor originario a quien pasa a reemplazarlo (...) La segunda consiste en lograr que el acuerdo produzca efectos frente al compelido a satisfacer, lo que se obtiene ya sea con la correspondiente notificación o mediando la aceptación de éste.

Por lo tanto, el conocimiento del deudor, ya sea que lo documenten los interesados o provengan de una manifestación propia de aquel, que puede ser fortuita o provocada, constituye un punto de quiebre para determinar los alcances que del acto se derivan”. (...)

---

<sup>17</sup> Folios 140 al 142 del archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>18</sup> C.E., Sección Tercera, Subsección C, Exp. 11001-03-15-000-2020-04612-01(AC), may. 07/21. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

<sup>19</sup> Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de abril de 2012, radicación n.º 25000-23-26-000-1994-09759-01 (20817); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1 de julio de 2015, radicación n.º 25000-23-26-000-2000-00114-02 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de octubre de 2003, radicación n.º 25000-23-24-000-2003-1550-01.

<sup>20</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de abril de 2012, radicación n.º 25000-23-26-000-1994-09759-01 (20817)

<sup>21</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia SC-14658 de 23 de octubre de 2015, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez, radicado número 11001-31-03-039-2010-00490-01.

Corporación que, en el fallo antes citado, después de revisada su línea jurisprudencial frente a la interpretación de las normas del Código Civil que regulan la cesión de créditos, concluyó que:

(...) Incluso de la forma como aparecen redactados los artículos 1960, 1962 y 1963 ibidem, lo trascendente es informar la ocurrencia del cambio y no la obtención de un visto bueno. Tan es así que el asentimiento indica es un conocimiento del relevo del otro contratante, sin que su obtención sea imperiosa.

(...) En conclusión, el sentido natural de las normas es que la negativa del deudor a satisfacer el crédito, estando debidamente enterado del acuerdo traslativo de la calidad de acreedor, no deslegitima ni inhibe ni neutraliza al cesionario para acudir a las instancias judiciales en pos de obtener su cumplimiento, ya que la vinculación entre el obligado y quien es válidamente nuevo titular del derecho se da o se concreta con la notificación, independientemente de la aquiescencia de aquel (...)

De acuerdo con lo anterior, las cesiones realizadas mediante los contratos referenciados son oponibles a la Fiscalía General de la Nación y producen efectos jurídicos, dado que esta entidad conoció los contratos respectivos y los aceptó, tal como consta en el oficio de 8 de marzo de 2021 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Pago de Sentencias y Conciliaciones.

Así las cosas, debe concluirse que el FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEA – COMPARTIMENTO 1 se encuentra legitimado para actuar en el extremo activo del proceso, pues ostenta la titularidad del 35% de la totalidad de derechos económicos reconocidos en la sentencia de 28 de febrero de 2014 proferida en primera instancia por este Juzgado y la sentencia del 20 de octubre de 2015 expedida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2012-00213-00.

## 5.2. Naturaleza de la obligación reconocida en el título base de la ejecución.

El artículo 422 Código General del Proceso, establece los requisitos que debe cumplir el documento a través del cual se pretende que se libere mandamiento ejecutivo, a saber: i) Que se trate de documento o documentos auténticos, que conformen una unidad jurídica, ii) Que emanen de actos o contratos del deudor o causante (títulos contractuales), o de una sentencia de condena proferida por el juez (títulos judiciales) y iii) Que en dicho documento aparezca, a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación **clara, expresa y exigible**.

De este modo, es claro que al momento de librar mandamiento ejecutivo, el Juez debe examinar si, el título presentado como base del recaudo contiene una obligación **inequívoca**, esto es, fácilmente inteligible y entendible, así como **expresa** en cuanto al crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado y, finalmente **exigible**, es decir, que la misma pueda demandarse por no estar sometida a plazo o condición, o de lo contrario, que el término para su cumplimiento ya se encuentre vencido.

Por tanto, tratándose de títulos ejecutivos, el Consejo de Estado ha expresado que éstos pueden ser simples, cuando la obligación se consagra en un solo documento, o complejo, cuando el mismo lo constituyen varios documentos, como sucede por regla general con el cobro ejecutivo de obligaciones derivadas de contratos administrativos o sentencias judiciales, en las cuales, el título

generalmente lo conforma la providencia y su acto administrativo de cumplimiento<sup>22</sup>.

De esta manera, es importante indicar que cuando la obligación se encuentra contenida en una decisión judicial, generalmente el título ejecutivo es complejo, ya que estará conformado por la copia auténtica de la sentencia, con las respectivas constancias de notificación y ejecutoria, y por el acto administrativo con el que la Administración pretende dar cumplimiento a lo ordenado en ésta<sup>23</sup>; evento en el cual, la demanda ejecutiva se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta, no obstante, el Consejo de Estado ha indicado que, excepcionalmente el título ejecutivo será simple, cuando el mismo lo constituye únicamente la sentencia, al no haberse dado cumplimiento a la misma<sup>24</sup>.

A partir de lo anterior, es pertinente precisar que en el caso concreto se está frente a un título simple en consideración a que además de las sentencias de primera y segunda instancia contentivas de la obligación, no existe un acto administrativo de cumplimiento, mediante el cual la entidad accionada haya reconocido la obligación determinada en la condena impuesta en su contra.

En efecto, en los numerales 2, 3 y 5 de la sentencia de 28 de febrero de 2014, que fueron confirmados en su integridad por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de segunda instancia de 20 de octubre de 2015, se impuso a la Fiscalía General de la Nación la siguiente condena:

(...) **SEGUNDO: CONDENAR** a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** a pagar al señor **CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO** por concepto de DAÑO EMERGENTE, la suma de CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DE PESOS **(\$105'150.000)** Mc/te.- Y por LUCRO CESANTE la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO **(\$228'135.985)**

**TERCERO: CONDENAR** a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** a pagar a los demandantes por concepto de Perjuicios Morales, el equivalente en pesos, las siguientes sumas, así:

- CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO en calidad de afectado directo la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- JOSÉ FABIO GÓMEZ GIRALDO en calidad de padre del afectado directo la suma de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- ANA RITA GIRALDO DE GÓMEZ en calidad de madre del afectado directo la suma de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- GUILLERMO ENRIQUE GÓMEZ GIRALDO en calidad de hermano del afectado directo la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- BEATRIZ ELENA GÓMEZ GIRALDO en calidad de hermana del afectado directo la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO en calidad de hermano del afectado directo la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- DIANA PATRICIA GÓMEZ GIRALDO en calidad de hermana del afectado directo la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

<sup>22</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 1 de octubre de 2008, Expediente No. 26.706, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>23</sup> Consejo de Estado, Sección Cuarta, Providencia del 26 de febrero de 2014, Expediente No. 19250, Consejera Ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

<sup>24</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 02 de abril de 2014, Expediente No. 1002-14, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.



- LEÓN RAMIRO GÓMEZ GIRALDO en calidad de hermano del afectado directo la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

**QUINTO: CONDÉNASE EN COSTA** (sic) a la parte demanda (sic). FIJASE como AGENCIAS EN DERECHO el 7% de la condena. (...)

Posteriormente mediante auto de 7 de junio de 2016 se aprobó la liquidación de costas en los siguientes términos:

(...) **APROBAR**, la liquidación de costas practicada por la Secretaría del Despacho visible a folio sesenta y uno (61) del segundo cuaderno, por la suma de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 40.757.621,45). (...)

En este contexto, la parte ejecutante solicita que se libre mandamiento de pago en contra de la Fiscalía General de la Nación por el valor de la condena establecida en los numerares numerales 2 y 3 de la sentencia de 28 de febrero de 2014, los intereses moratorios devengados conforme a lo estipulado en el artículo 195 del CPACA y el monto establecido como condena en costas en el auto de 7 de junio de 2016.

Sobre este particular, se advierte que el título presentado como base de la ejecución cumple con los requisitos consagrados en el artículo 422 del CGP al contener una obligación clara, expresa y exigible consistente en el pago de una indemnización cuantificable en una suma líquida de dinero a favor de la parte accionante que se ajusta a los postulados del artículo 424<sup>25</sup> ibidem.

### **5.3. Procedencia del mandamiento ejecutivo.**

Dado que resulta viable acceder a la solicitud de ejecución presentada por el FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 1 se procederá a especificar los montos sobre los cuales se libraré mandamiento de pago teniendo en cuenta los valores de la condena y la cesión de practicada a su favor mediante la cual se le reconoció la titularidad del 35% de la condena obrante en el título base de la ejecución.

#### **5.3.1. Daño emergente y lucro cesante.**

En el numeral 2 de la parte resolutive de la sentencia de 28 de febrero de 2014 se reconoció una indemnización a favor del señor CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO por la causación de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante. Las sumas reconocidas fueron las siguientes:

---

<sup>25</sup> ARTÍCULO 424. EJECUCIÓN POR SUMAS DE DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe.

Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas. Cuando se pidan intereses, y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar el porcentaje de la misma.

<b>LUCRO CESANTE</b>	\$105.150.000
<b>DAÑO EMERGENTE</b>	\$228.135.985
<b>TOTAL PERJUICIOS MATERIALES</b>	\$335.285.985

**5.3.2. Perjuicios morales.**

Aunado lo anterior, en el numeral 3 de la parte resolutive de la providencia se reconoció una indemnización por los perjuicios morales causados a los integrantes de la parte accionante, para lo cual se establecieron montos que oscilaron entre los 100 y 25 salarios mínimos mensuales vigentes.

Con el propósito de establecer las sumas de dinero específicas que integran la indemnización, se efectuará la conversión de los montos fijados al valor del salario mínimo mensual legal vigente en el año 2015 momento en el que cobró ejecutoria la sentencia de segunda instancia.

<b>DEMANDANTE</b>	<b>MONTO RECONOCIDO SMLMV a la fecha de ejecutoria de la sentencia (año 2015)</b>	<b>SUMA RECONOCIDA</b>
CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO	100 SMLMV	\$ 64.435.000
JOSÉ FABIO GÓMEZ GIRALDO	80 SMLMV	\$ 51.548.000
ANA RITA GIRALDO DE GÓMEZ	80 SMLMV	\$ 51.548.000
GUILLERMO ENRIQUE GÓMEZ GIRALDO	25 SMLMV	\$ 16.108.750
BEATRIZ ELENA GÓMEZ GIRALDO	25 SMLMV	\$ 16.108.750
CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO	25 SMLMV	\$ 16.108.750
DIANA PATRICIA GÓMEZ GIRALDO	25 SMLMV	\$ 16.108.750
LEÓN RAMIRO GÓMEZ GIRALDO	25 SMLMV	\$ 16.108.750
<b>TOTAL PERJUICIOS MORALES</b>		<b>\$ 248.074.750</b>

**5.3.3. Condena en costas.**

Finalmente, mediante auto de 7 de junio de 2016 se fijaron las costas a favor de la parte accionante en una suma equivalente a (\$ 40.757.621,45). Al igual que el capital proveniente de la indemnización resulta procedente librar mandamiento de pago frente al 65% del valor reconocido en los términos de la cesión de derechos pactada por el ejecutante CARLOS MARIO GÓMEZ GIRALDO.

**5.3.4. Total del capital adeudado e intereses moratorios.**

Teniendo en cuenta los términos pactados en los contratos de cesión de derechos se advierte que el valor a reconocer a favor del ejecutante FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 1 corresponde al 35% del valor total de la condena, bajo los siguientes parámetros:

<b>PERJUICIOS MATERIALES</b>	\$ 335.285.985
<b>PERJUICIOS MORALES</b>	\$ 248.074.750

<b>CONDENA EN COSTAS</b>	\$ 40.757.621,45
<b>TOTAL CONDENA</b>	\$ 624.118.356
<b>CAPITAL ADEUDADO AL EJECUTANTE (35 %)</b>	\$ 218.441.424

Ahora bien, de acuerdo a lo estipulado por el numeral 4<sup>26</sup> del artículo 195 del CPACA el valor total de la condena devenga intereses moratorios a partir de su ejecutoria sin que resulte procedente efectuar una liquidación individual de intereses frente a cada uno de los beneficiarios de la indemnización.

En consecuencia, en el caso concreto los intereses moratorios se fijarán respecto del total del capital adeudado al ejecutante correspondiente al 35% de la condena y que asciende a la suma de doscientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos (\$ 218.441.424).

Teniendo en cuenta que en el presente caso la solicitud de cumplimiento de la sentencia se presentó el 22 de junio de 2016<sup>27</sup>, con posterioridad al término de 3 meses consagrado en el artículo 192<sup>28</sup> del CPACA, el pago de los intereses moratorios causados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia se ajustará a las siguientes reglas:

Desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 16 de febrero de 2016 y desde el 22 de junio de 2016 hasta la fecha del pago total de la obligación.

En efecto, de a acuerdo a lo señalado en el numeral 4 del artículo 195 del CPACA los intereses del total del capital adeudado se causarán bajo los siguientes parámetros:

<b>Periodo</b>	<b>Tasa a devengar</b>
16 de noviembre de 2015 a 16 de febrero de 2016 (3 meses siguientes a la ejecutoria)	Tasa equivalente al DTF
22 de junio de 2016 al 13 de septiembre 2016 (desde la solicitud de pago hasta el vencimiento del término de 10 meses)	Tasa equivalente al DTF
14 de septiembre de 2016 hasta la fecha de pago de la obligación	Tasa comercial

En consideración a lo anteriormente expuesto, este Juzgado

**RESUELVE:**

**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** en contra de la Nación – Fiscalía general de la Nación y a favor del FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 1 por las siguientes sumas de dinero:

<sup>26</sup> 4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial.

<sup>27</sup> Folio 51 archivo N° 04 del expediente digital.

<sup>28</sup> Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

**1.1.** Por concepto de capital la suma de doscientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos (\$ 218.441.424).

**1.2.** Por los intereses causados por el capital determinado en el numeral anterior desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 16 de febrero de 2016 y desde el 22 de junio de 2016 hasta la fecha del pago total de la obligación, de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA y lo determinado en el numeral 5.3.4 de la presente providencia.

**SEGUNDO:** De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 2080 de 2021 notifíquese personalmente al representante legal de la entidad ejecutada Nación – Fiscalía General de la Nación o a quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Se le advierte a la entidad ejecutada que dispone, a partir de la notificación personal de esta decisión, **de cinco (5) días para el pago del crédito o de diez (10) días para proponer excepciones en defensa de sus intereses**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 430, 431, 442 y 443 del CGP.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** por estado al ejecutante el presente auto de mandamiento de pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CPACA y el artículo 50 de la ley 2080 de 2021.

**CUARTO: SE RECONOCE PERSONERÍA** al abogado JAVIER SÁNCHEZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.282.804 y Tarjeta Profesional N° 285.297 para que actúe en representación de la parte ejecutante, conforme al poder aportado con la demanda.

**QUINTO:** De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la ley 2080 de 2021 , se ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: [of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**SEXTO:** Este juzgado acatando el deber consagrado el artículo 46 de la ley 2080 de 2021, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**  
**Correo electrónico:** [adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
**Teléfono:** (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**  
**Correo electrónico:** [procjudadm57@procuraduria.gov.co](mailto:procjudadm57@procuraduria.gov.co)  
[mecaicedo@procuraduria.gov.co](mailto:mecaicedo@procuraduria.gov.co)
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**  
[repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- ✓ **Radicación memoriales:**  
[of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

**Teléfonos: (2) 896-24-12  
(2) 896-24-11**

MAT.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO  
JUEZ**

Firmado Por:

**Paola Andrea Gartner Henao  
Juez  
Juzgado Administrativo  
Oral 001  
Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **49203a86809b3201e60ec8168ea9fa313ffd72a18df7074b1053af13cc928678**  
Documento generado en 20/04/2022 04:12:53 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>